

Santiago, once de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, don Omar Morales Márquez, Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo de 23 de noviembre de 2023 recaída en autos rol C 6.367-23, dictada por el Consejo para la Transparencia, que acoge el amparo presentado por doña Bárbara Sepúlveda Hales, requiriendo, en lo esencial, hacer entrega a la reclamante de la cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de pensiones de alimentos, segregadas por sexo y el total del monto de deuda del porcentaje de hombres y total del monto de deuda del porcentaje de mujeres

Funda el recurso expresando que con fecha 25 de mayo de 2023 recibió el requerimiento de información realizado en virtud de la Ley de Transparencia individualizado bajo el código de ingreso AK002T0026491, presentado por doña Bárbara Sepúlveda Hales en el que indicaba: *“Cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de pensiones de alimentos, segregadas por sexo. Total del monto de deuda del porcentaje de hombres y total del monto de deuda del porcentaje de mujeres”*.

Afirma que con fecha 10 de enero de 2023, el Servicio procedió a dar respuesta mediante Carta UTSI N° 2.017, expresando, en síntesis, que toda la información almacenada en el registro en cuestión no es de acceso público y que los datos ahí albergados tiene el carácter de reservado para toda persona, salvo aquellas señaladas explícitamente por la ley, haciendo presente que tal requerimiento contrariaba el principio de finalidad consagrado en el citado artículo 9° inciso primero, de la Ley N° 19.628, por lo cual no corresponde acceder a lo solicitado, y que generar dicha lista atentaría contra los derechos de las personas, especialmente el respeto y protección de su vida privada, causal que habilitaba aplicar la reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Indica que, con fecha 16 de junio de 2023, la reclamante Sra. Sepúlveda Hales dedujo amparo a lo que estimaba su derecho de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia, de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SHYVXXXZFNC

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, el que fundamentó en que el Servicio dio respuesta negativa a la solicitud de información por una “*supuesta protección de datos personales*”. El 23 de agosto de 2023 el Servicio emitió Oficio DN Ord. N° 469 evacuando los descargos respectivos. El 23 de noviembre, el H. Consejo para la Transparencia acordó acoger el amparo. Dicha decisión se notificó al Servicio, con fecha 1° de diciembre de 2023.

En cuanto al fondo, refiere que conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 21.389, que Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos, y teniendo en consideración lo estipulado en el artículo 11° del Decreto N°62, de 2022, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que Aprueba Reglamento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, se desprende que el marco jurídico limita – *sin distinción alguna*– el acceso al referido registro, estableciendo expresamente que el Registro Nacional de Deudores de Alimentos sólo puede ser consultado por las personas e instituciones con interés legítimo en la consulta.

Al respecto precisa que, según el artículo 1°, numeral 18, de la Ley N°21.389, que incorpora un nuevo Título Final a la Ley N°14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, el que establece en el artículo 20 de la referida Ley, en su número 3, lo siguiente: “*Artículo 20.- Definiciones. Para los efectos de este Título, se entenderá por: 3. Personas con interés legítimo en la consulta: el deudor de alimentos, su alimentario o el representante legal de éste, los tribunales con competencia en asuntos de familia y las personas o entidades obligadas a consultar el Registro*”.

De lo expuesto, colige que tales datos personales sólo pueden utilizarse para los fines para los cuales fueron recolectados, conclusión que se encuentra plenamente alineada con la Constitución y el inciso primero del art. 9° de la ley N° 19.628. De conformidad a lo anterior, la información de cada inscripción sólo se entregará a los que tengan interés legítimo en la consulta, es decir, el deudor de alimentos, su alimentario o el representante legal de éste, los tribunales con competencia en asuntos de familia y las personas o entidades obligadas a consultar al Registro.



Luego, arguye que doña Bárbara Sepúlveda, en la práctica, ejerce derecho de petición, usando indebidamente el marco de la ley de transparencia, que no es la vía idónea para acceder a la información del Registro Nacional de Deudores de Alimentos. En esta línea, aduce que, la información requerida es inexistente, dado que no está previamente en un soporte que el Servicio deba mantener, en los términos requeridos por el ciudadano; añade que lo pedido se encuentra especialmente relacionado con un tratamiento no autorizado de datos personales y además sensibles, en circunstancias que la Ley de Transparencia permite acceder a la información que al momento de la solicitud obre en poder del órgano de la Administración Pública requerido, y esté contenida en algunos de los soportes que el ordenamiento jurídico establece, sin que esto importe la obligación de generar, elaborar o producir información, sino que a entregar aquella actualmente disponible.

Finalmente, solicita acoger el reclamo, declarando la ilegalidad de la decisión impugnada.

SEGUNDO: Que, informa don David Ibaceta Medina, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia.

En primer término, expone los siguientes antecedentes de hecho:

“1. El 25 de mayo de 2023, doña Bárbara Sepúlveda Hales solicitó al Servicio de Registro Civil y de Identificación lo siguiente: “Cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de pensiones de alimentos, segregadas por sexo. Total del monto de deuda del porcentaje de hombres y total del monto de deuda del porcentaje de mujeres”.

2. Mediante carta UTSI N° 2017, de fecha 16 de junio de 2023, el Servicio de registro Civil y de Identificación indica que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto N° 62 de 2022, la información del mencionado registro no es de acceso público, salvo respecto de aquellas personas que expresamente indica la propia Ley. Indica, además, que la publicidad de dicho registro atentaría contra el respecto y protección de la vida privada, y en consecuencia, aplica la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3. El 16 de junio de 2023, doña Bárbara Sepúlveda Hales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado



órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada.

4. El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien reiteró la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto N° 62 de 2022, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que establece que para tener acceso al mencionado registro se requiere interés legítimo, indicando cómo dichas personas podrán consultar la información contenida. En ese sentido, indicó que toda la información del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no es de acceso público, teniendo carácter reservado por aplicación de la causal dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Agrega que la entrega de la información requerida constituiría efectuar un tratamiento de datos personales, lo que implicaría para dicho Servicio infringir el principio de finalidad establecido en el artículo 9 de la Ley N° 19.628. Por último, indica que los argumentos esgrimidos son concordantes de la protección a los datos personales establecida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, al señalar que el tratamiento de éstos se hará de conformidad a la ley

5. Luego de analizarse todos los antecedentes, el Consejo para la Transparencia, mediante Decisión de Amparo Rol C6367-23, adoptada con fecha 23 de noviembre de 2023, acogió el amparo por denegación de acceso a la información deducido por doña Bárbara Sepúlveda Hales, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, requiriendo lo siguiente: “Hacer entrega a la reclamante de la cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de pensiones de alimentos, segregadas por sexo y el total del monto de deuda del porcentaje de hombres y total del monto de deuda del porcentaje de mujeres”

Seguidamente, expresa que, teniendo en consideración la especificidad de la parte petitoria del reclamo de autos, y el tenor de los fundamentos de derecho en que se apoya, el debate se centra únicamente en determinar si esa Corporación obró conforme a derecho, al acoger el amparo deducido, al



ordenar la entrega de datos estadísticos que obran en poder del órgano, previa sistematización

Luego, arguye que la decisión de amparo C-6367-23 no es ilegal, por cuanto se ajusta a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República y a los artículos 3°, 4°, 5°, 10 y 11 de la Ley de Transparencia, ya que la información solicitada obra en poder del servicio en el ejercicio de sus funciones públicas.

Aduce que, del tenor literal de las disposiciones legales citadas, queda claro que el espíritu y la voluntad del legislador, plasmados en la Ley N° 20.285, consiste en que el ciudadano pueda acceder a toda información que exista y obre en poder de los órganos de la Administración, sea cual sea el formato material o soporte en que esta se encuentre, sin importar su origen, clasificación o procesamiento, de lo que se sigue que es la misma Ley la que permite el acceso a información incluso cuando involucre el procesamiento, sistematización o consolidación de antecedentes todos los cuales ya obran en su poder, lo que se ve reforzado por lo dispuesto en las letras a) y d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, que consagran los Principios de Relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento; y de Máxima Divulgación, de acuerdo al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, de lo que se sigue que no hay infracción legal alguna en la decisión C-6367-23, pues la información base obra en poder del órgano.

En este sentido, aduce que se debe desestimar la alegación extemporánea del servicio en orden a que no se trataría de una solicitud en el marco de la Ley de Transparencia, sino del ejercicio del derecho de petición, y que la información no existiría y que no tendría la obligación de sistematizar lo pedido.

Aclara que, en esta materia, lo que importa al legislador son únicamente dos cosas: que la información obre en poder del órgano y que, sobre dichos antecedentes, no se configuren causales de reserva; y en la



especie, la información existe, la que se debe sistematizar, y sobre la cual, el órgano en sede administrativa alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, alegación que, como es de toda lógica, quedó desestimada al tratarse de datos estadísticos, y no de datos por medio de los cuales se pueda identificar a persona alguna.

Sostiene que se equivoca el Servicio de Registro Civil e Identificación al sostener que sólo pueden pedir información personas con interés legítimo, ya que dicho requisito sólo aplica cuando se requiere información del registro en comento respecto de personas determinadas y no cuando se trata de datos estadísticos. Indica que no existe en la especie entrega de datos personales, sino de datos estadísticos; y por dicha razón, precisamente fue que en sede administrativa se descartó la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

Adiciona que en el reclamo se invocan nuevos argumentos que no formaron parte del debate en el procedimiento administrativo, por lo que su invocación extemporánea, infringe el principio de congruencia procesal.

TERCERO: Que, notificándose del presente recurso al tercero interesado, consta certificado de uno de marzo de dos mil veinticuatro que consigna que aquel no presentó descargo u observación alguna, dentro de plazo.

CUARTO: Que, enseguida, el artículo 21 de la Ley N° 20.285, contempla las excepciones o causales por las que se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información.

En el caso de autos, la única causal de denegación de acceso a la información opuesta por la parte reclamante es la del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, es decir: *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o á derechos de carácter comercial o económico”*.

QUINTO: Que, en relación con esta causal de reserva, amparada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, la parte reclamante la hace consistir en que el marco jurídico que regla el Registro Nacional de Deudores de Alimentos limita – *sin distinción alguna*– el acceso al referido registro, estableciendo expresamente que el sólo puede ser consultado por



las personas e instituciones con interés legítimo en la consulta, es decir, el deudor de alimentos, su alimentario o el representante legal de éste; los tribunales con competencia en asuntos de familia y; las personas o entidades obligadas a consultar al Registro, no teniendo la peticionaria ninguna de dichas calidades, por lo que de entregarle la información requerida, se estaría afectando el derecho a la vida privada de los deudores de pensión alimenticia inscritos en éste.

SEXTO: Que, se debe considerar que con fecha 23 de noviembre de 2023, el Consejo para la Transparencia, adoptó la decisión respecto del amparo Rol N° C6367-23, argumentando para desestimar la protesta en análisis, que:

“2) Que, la información solicitada dice relación con información estadística y numérica, toda vez que se trata del total de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la deuda de éste, información que no está asociados a personas identificadas o identificables, en conformidad de lo establecido en el artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada (...)

4) Que, procede desestimar la alegación relativa al artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en relación con las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto según se indicó precedentemente, es posible hacer entrega de la información requerida sin datos de identificación de las personas inscritas en el mencionado Registro, ya que ningún dato de identificación personal -o cualquier otro personal o sensible- no forma parte de la información reclamada.”. (Sic)

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, del razonamiento transcrito en el motivo que antecede, se colige en forma inequívoca, que las alegaciones formuladas por la reclamante, en relación a la causal de reserva del artículo 21 N° 2, no cumplen el requisito establecido en forma determinada por la ley para que tal excepción prospere, desde que no se acreditó por el impugnante –*siendo de su cargo hacerlo*- que la información requerida dijera relación con datos de carácter personal o datos personales, relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, como exige el artículo 2 letra f) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada –*en relación al artículo 19 N° 4 de la Carta*



Fundamental-, sin que la revelación de esta información, en cuanto se refiere a “*la cantidad de personas que se encuentran en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos*” permita por sí misma, acceder a la individualización de quiénes forman parte de dicho catastro.

En ese entendido, no se vislumbra cómo la entrega de la información requerida pudiese vulnerar el mandato contenido en el artículo 9 inciso primero de la Ley N°19.628, toda vez que *-y como ya se dijo-* los datos personales de quiénes integran el registro en cuestión, no serán develados.

Así las cosas, y no verificándose la ilegalidad denunciada por el reclamante, tal protesta no prosperará.

OCTAVO: Que, por otra parte, y no obstante haberse determinado el carácter público de la información requerida por el tercero interesado, no puede obviarse que el tratamiento de los datos que esta trae aparejados no forma parte de las obligaciones que el Servicio de Registro Civil e identificación debe efectuar por mandato legal, de lo que se sigue que tal labor excede de sus competencias, toda vez que de accederse a tal planteamiento se estaría efectuando por parte de dicha repartición pública un procesamiento de datos *-de naturaleza “sensible” en el presente caso-*, cuestión que le está vedada.

Por lo demás, resulta evidente que lo solicitado *-la segregación por sexo y por el total del monto de deuda del porcentaje de hombres y total del monto de deuda del porcentaje de mujeres-*, no se comprende dentro de la obligación atingente a la transparencia o acceso a la información pública que consagra el constituyente y el legislador, porque dicha disponibilidad, en ningún caso puede comprender un procesamiento, estandarización, unificación, elaboración, manejo o comparación de datos ordenados de acuerdo a la necesidad del requirente, a menos que dentro de las funciones del servicio se encuentre dicha tarea, o si así lo disponga la Ley, siendo aquella una labor que compete a quien la solicita pues, corresponde a su interés particular y no al servicio quien se encuentra obligado a mantener y entregar aquella información que, conforme se explicó, le compete para el ejercicio de sus potestades.

NOVENO: Que, en el mismo sentido la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol N° 46.673-2022, mediante pronunciamiento de 26 de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SHYVXXXZFNC

diciembre de 2022, determinó que “*si la información solicitada se encuentra en bases de datos, se cumple con la obligación de transparencia, si se entregan esas bases de datos, no siendo obligación del servicio sistematizar la misma conforme la particular solicitud que haga el requirente.*”.

DÉCIMO: Que finalmente, reafirma lo antes razonado, lo previsto en el artículo 23 de la Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, el cuál dispone en sus letras a) y b) que son funciones del servicio de Registro Civil e identificación -*en lo que respecta al Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias*-, realizar las inscripciones, modificaciones, actualizaciones y cancelaciones en el Registro, ordenadas por el tribunal competente, además de certificar en línea, por los medios y en la forma que determine el reglamento, si la persona por la que se consulta tiene inscripciones vigentes en el Registro en calidad de deudor de alimentos.

Es decir, la norma en comento circunscribe las atribuciones de la repartición pública recurrente a cuestiones administrativas determinadas, dentro de las que no se incluye por cierto la de efectuar trabajos estadísticos respecto de la información contenida en dicho registro, razón por la que está corte acogerá parcialmente la acción intentada, en los términos que se señalarán en lo resolutivo del presente pronunciamiento.

Y teniendo además en consideración lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República y en los artículos los artículos 21 N° 2 , 26, 28, y 30 de la Ley N° 20.285, **se acoge parcialmente**, el reclamo de ilegalidad deducido por el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, en contra de la decisión de amparo pronunciada por el Consejo para la Transparencia con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés recaída en el Proceso Rol N° C 6.367-23, solo en cuanto se limita la información que dicha repartición pública deberá entregar al tercero interesado, a la cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez

Rol N° Contencioso Administrativo-774-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SHYVXXXZENC

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Il. Corte de Apelaciones de Santiago,** presidida por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino, conformada por el Ministro suplente señor Fernando Valderrama Martínez y el Abogado Integrante Manuel Luna Abarza.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SHYVXXXZFNC

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z., Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogado Integrante Manuel Domingo Antonio Luna A. Santiago, once de junio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a once de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SHYVXXXZFNC